

INTERVENCIÓN DE LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA

Antonia Urrejola

Sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA

23 de junio de 2021

Señor Embajador Sir Ronald Sanders, representante Permanente de Antigua y Barbuda y presidente del Consejo Permanente;

Señor Luis Almagro, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA);

Embajador Néstor Mendez, Secretario General Adjunto de la Organización de los Estados Americanos (OEA);

Honorables Representantes Permanentes y Alternos de Estados Miembros y Observadores;

Representantes de la Sociedad Civil,

Señoras y señores:

En nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tengo el honor de dirigirme ante este Consejo Permanente. En esta ocasión la Comisión manifiesta su seria preocupación por el grave escalamiento de la represión en Nicaragua ocurrido en las últimas semanas, consistente en la intensificación de la persecución penal contra reconocidos líderes y lideresas de la oposición nicaragüense, personas defensoras de derechos humanos y de la prensa independiente.

En un periodo de 20 días, autoridades del Estado nicaragüense han detenido y criminalizado a 5 personas precandidatas presidenciales para las próximas elecciones generales a realizarse en noviembre de este año: Cristiana Chamorro Barrios, Arturo Cruz Sequeira, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro García y Miguel Mora Barberena.

En el mismo lapso de tiempo, la Comisión a través del Mecanismo Especial de Seguimiento a Nicaragua (MESENI) ha tomado conocimiento sobre la detención y criminalización de por lo menos 20 personas, entre líderes y lideresas de la oposición y empresariales, personas defensoras de derechos humanos y periodistas independientes. Según la información recibida, algunas de estas detenciones habrían ocurrido bajo el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional. En la mayoría de los casos, los domicilios fueron allanados sin mediar orden judicial.

En particular, la CIDH manifestó preocupación por las detenciones y criminalización de Violeta Granera Padilla, José Adán Aguerri, José Bernard Pallais, quién no estaría recibiendo atención médica adecuada para sus padecimientos; Suyen Barahona, Hugo Torres, Victor Hugo Tinoco, Tamara Dávila, Dora M. Téllez y Ana Margarita Vijil. En estos casos, por ejemplo, la Comisión tomó conocimiento de golpes propinados contra Ana Margarita y Dora María Téllez durante su detención. Asimismo, el 15 de junio, se tuvo conocimiento de la detención de Luis Alberto Rivas Anduray, Gerente del Banpro.

El 22 de junio, la CIDH tomó conocimiento de la detención del periodista Miguel Mendoza, el arresto domiciliario de María Fernanda Flores, así como del allanamiento al domicilio del periodista Carlos Fernando Chamorro, quién habría tenido que huir del país.

La CIDH destaca además que varias de las personas detenidas son actualmente beneficiarias de medidas cautelares de la Comisión.

Según información pública del Estado, estos casos, salvo el de Cristiana Chamorro a quien se le imputan, entre otros, delitos de presunto lavado de activos, se investigan bajo la "Ley No.1055 de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz". Esta ley, aprobada el año pasado, no establece tipos penales, y refiere a un conjunto de tipos penales previstos en el Código Penal de Nicaragua para los "Actos de Traición", "Delitos que comprometen la Paz" y "Delitos contra la Constitución Política de la República de Nicaragua". La falta de información no permite conocer los tipos penales que se están utilizando en los procesos de investigación. En este contexto, ninguna de las personas detenidas ha sido formalmente acusada por el Ministerio Público y, para ese fin, éstas se encuentran detenidas bajo una figura procesal de detención preventiva sin acusación fiscal hasta por 90 días, resultado de una reforma al Código Procesal Penal realizada este año.

La CIDH advierte además que el Estado no estaría garantizando a las personas procesadas el derecho a una defensa legal adecuada, restringiendo el acceso a abogados y representantes legales, asignando en su lugar a una abogada o abogado de oficio, y la mayoría se encontrarían incomunicadas. La CIDH recibió información sobre la realización de audiencias "secretas", sin representación legal, realizadas en instalaciones distintas a los juzgados y tribunales de Managua. De igual manera, la CIDH tomó conocimiento sobre la falta de efectividad de los recursos de habeas corpus o exhibición personal presentados.

Familiares y organizaciones de la sociedad civil han expresado asimismo su preocupación por la falta de información sobre el lugar exacto donde se encuentran las personas detenidas, presumiblemente en la Dirección de Auxilio Judicial, así como sobre su estado de salud. La CIDH fue informada sobre la negativa a proporcionar información por parte de las autoridades e inclusive, la restricción e impedimento a los familiares para proporcionar alimentos. En algunos casos, las autoridades habrían permitido el ingreso únicamente de alimentos líquidos.

Esta falta de garantías judiciales mínimas reflejan la arbitrariedad en el actuar del gobierno nicaragüense, en un sistema sin pesos ni contrapesos, caracterizado por la falta de independencia judicial así como por la falta de independencia entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.

La CIDH ha venido documentando un prolongado quebrantamiento del Estado de Derecho desde su Informe de País emitido tras la visita al país al inicio de la crisis en 2018, así como en el Capítulo IVB de sus Informes Anuales emitidos desde 2018 hasta el 2020. Asimismo ha venido denunciando la prolongación del estado de excepción de facto en el país, en el que se mantiene -y ahora intensificado- el cierre de los espacios democráticos bajo una estrategia que busca impedir e inhibir cualquier forma de manifestación contraria al Gobierno, y que incluye la aprobación de una serie de leyes contrarias al derecho internacional de los derechos humanos.

La gravedad de la situación de derechos humanos en Nicaragua en las últimas semanas se refleja en el incremento del número de solicitudes de medidas de protección recibidas por este organismo internacional. En lo que va del 2021 la CIDH ha recibido 27 solicitudes de medidas de protección de personas nicaragüenses, la mayor parte en presentadas el mes de junio, en comparación con las 26 solicitudes recibidas en todo el año 2020. Estos números hablan por sí solos.

Todo esto ocurre en un contexto de impunidad generalizada frente a las graves violaciones a los derechos humanos documentadas, ante la narrativa oficial que desconoce la persistencia de la crisis de derechos humanos.

La CIDH recuerda que el GIEI en su informe final consideró que la respuesta del Estado a las manifestaciones y protestas que iniciaron en abril de 2018 se dieron en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil y que el Estado de Nicaragua llevó a cabo conductas, que de acuerdo con el derecho internacional, deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente casos de asesinato, privación de la libertad, persecución, violación, tortura y desaparición forzada.

Los hechos ocurridos en estas semanas evidencian una nueva fase de la represión de cara a las próximas elecciones, y que pone en duda la voluntad del Estado nicaragüense de realizar elecciones libres, justas y transparentes, situación que fue también condenada por este Consejo Permanente el pasado 15 de junio de 2021, el cual, urgió al Estado la adopción de medidas que aseguren elecciones libres y justas en el país, concluyendo que las actuales condiciones no las hacen posibles.

La crisis de derechos humanos en Nicaragua, y la respuesta violenta del Estado ha resultado a la fecha en al menos 328 víctimas fatales; más de 2000 personas heridas; más de 100.000 personas que han migrado a otros países, la mayoría de ellas en busca de protección internacional; más de 1600 personas privadas de la libertad, ilegal y arbitrariamente en diferentes momentos de la crisis. De acuerdo con el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, articulado por la sociedad civil local, hasta la fecha, más de 124 personas permanecen privadas de libertad de manera arbitraria.

Ante esta profundización de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace un llamado a la comunidad internacional, y particularmente a los actores de la región americana, para que exijan al Estado poner fin inmediato a la persecución y las detenciones de las voces disidentes u opositoras, y liberar de inmediato a todas las personas que se encuentran detenidas en el contexto de la crisis iniciada en el 2018, garantizar su integridad y seguridad personal, a restablecer los derechos y garantías propias de un Estado democrático de derecho y a realizar las reformas institucionales que aseguren un ambiente de amplia participación democrática.

Embajadores y embajadoras, Representantes Permanentes ante este Honorable Consejo. ES más que evidente que existe una profundización de la crisis de derechos humanos en Nicaragua con graves consecuencias políticas y democráticas. La CIDH ha hecho un seguimiento constante de la situación, señalando su preocupación por el agravamiento de la crisis, y hemos estrechado aún más nuestro trabajo coordinado con la Oficina de la Alta Comisionada de DDHH de NU para atender estos hechos y hacer un llamamiento urgente a la comunidad internacional para que exijan al Estado de Nicaragua, y acá citó textualmente las palabras de la propia Alta Comisionada de DDHH ayer en el Consejo, la liberación inmediata a todas las personas detenidas arbitrariamente; cesar todo acto de persecución en contra de las voces disidentes; reestablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral libre, creíble y equitativo; y derogar la legislación restrictiva del espacio cívico y democrático.

Finalmente, quiero expresar un saludo solidario a todo el pueblo de Nicaragua, reafirmar que, como órgano regional de protección a los derechos humanos, la Comisión mantiene su compromiso de continuar monitoreando la situación en el país, con el fin de velar por la protección a la vida y la integridad física de las personas, defensa de las víctimas y la libertad de expresión del pueblo nicaragüense.